

UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN

Ramón Alberto GARZA

Hace poco más de diez años, una nación rica en talento y recursos naturales vivía convulsionada por las diferencias irreconciliables de sus ciudadanos.

Su viabilidad estaba secuestrada por los enconos, las insidias y las ambiciones de poder de unos cuantos privilegiados y otros tantos perversos, que veían en la unificación nacional la pérdida de sus espacios y de sus franquicias políticas y económicas.

Sus hombres más íntegros y liberales eran perseguidos y hasta privados de su libertad, mientras que las oportunidades de integración eran abortadas por la descalificación inmediata a sus interlocutores.

Entonces, un puñado de líderes políticos y sociales, hombres de empresa e intelectuales, decidieron hacer un alto para sustraerse de aquél monólogo político entre sordos que se negaban a deponer sus posiciones de intolerancia.

Trabajando con una visión compartida para construir un futuro, alejados de las cámaras y de los micrófonos, hicieron a un lado las afrentas del pasado y le dieron a esa nación un abanico de escenarios que les permitió a sus ciudadanos verse reflejados en el espejo del mañana y decidir democráticamente el mejor camino.

El vuelo del flamenco se alzó desde entonces en la convulsionada Sudafrica, que con sus elecciones de 1994 puso fin al absurdo *apartheid* entre blancos y negros, y se dispuso a recuperar su gobernabilidad, a legitimar sus instituciones y a reinsertarse en el concierto de las naciones de avanzada.

Viene a nuestra mente la experiencia sudafricana cuando vemos que México vive hoy un *apartheid* político severo y desgastante que amenaza con secuestrarle su viabilidad y su futuro.

Por un lado, experimentamos en el 2000 la exaltación de nuestra democracia en la consumación de una alternancia largamente esperada. Por el otro, vivimos la exaltación de la desilusión ciudadana ante una revolución de expectativas políticas, económicas y sociales trucas, que sucumben frente a un cambio operado a la deriva, sin filosofía ni estrategia.

En medio de esta confusión y de este desorden político, la inevitable resultante es una profunda crisis de gobernabilidad y de legitimidad política que vulnera seriamente el proyecto futuro de nación.

Vivimos hoy instalados en la terquedad individualista por demostrar que cada uno poseemos el monopolio de la verdad, de la virtud y de las soluciones, transmutando el necesario diálogo en monólogos entre sordos.

Hemos adoptado la descalificación y la intriga como instrumentos de operación política diaria, haciendo del pasado la plataforma perfecta para un interminable ajuste de cuentas.

Privilegiamos los acuerdos electorales por encima de los acuerdos de gobierno, convirtiendo al Congreso en una arena permanente en donde se dirime la sucesión política de 2006.

Aceptamos sucumbir a la egolatría que significa aparecer todos los días en las páginas de los periódicos o en la pantalla de televisión, a costa de otorgarle a esos medios una patente para convertirse en modernos tribunales de una inquisición que en muchos casos oculta su mercadotecnia bajo ropajes de libertad y transparencia.

Esa rueda del descrédito que echamos a andar sobre nuestras golpeadas y debilitadas instituciones nos tiene hoy aquí, debatiendo sobre cómo recuperar esa gobernabilidad perdida y cómo darle lustre, o por lo menos algo de vigencia, a un sistema político al que nadie respeta y del que, al menos hoy, nadie espera ya nada.

La figura presidencial, sea cual sea su nombre, está en su peor momento de desgaste y falta de credibilidad; la mayoría de los secretarios de Estado encuentran en la frivolidad televisiva su mejor escaparate para insertarse en los juegos sucesorios; los diputados y los senadores son exhibidos como personajes superficiales, sectarios y obstinados en exaltar diferencias y en diferir los acuerdos; los gobernadores se ven a sí mismos como modernos caciques que disponen territorialmente a sus anchas, aun por encima de la ley y el Poder Judicial pretende ser exhibido como una instancia al servicio de las peores causas. El país entero es hoy un complot que pretende imponerse sobre el complot de ayer.

El resultado de esta feria de vanidades, alineada en algunos casos con los peores vicios, tiene hoy a México a merced no necesariamente de sus mejores hombres, sino de aquellos personajes, públicos y privados, quienes desde las sombras de la corrupción tienen acceso a los recursos económicos que les permiten comprar voluntades, rentar operadores políticos, comprar espacios en los medios y ostentarse como los depositarios de un interés público que no parece tener otra medida que el egoísmo de su ambición por retomar con nuevos bríos las riendas del poder político o económico que ayer perdieron, o por mantener a cualquier precio el poder político o económico que mañana temen perder.

Son los hombres que, cuestionados por sus vínculos con la corrupción, las licitaciones, los gastos de campaña, las apuestas, el juego y el narcotráfico, transitan hoy por alcaldías, curules o gubernaturas, o incluso despachos de influyentes corporaciones, enarbolando las banderas de una concordia que jamás pusieron en práctica cuando, en sus mejores tiempos como operadores políticos o económicos, se dedicaban a sembrar enconos y a cosechar tempestades, como su mejor receta para sostenerse en el poder.

Pero hoy estamos obligados a hacer un examen de conciencia, porque el mañana ya nos alcanzó.

Un buen primer paso sería reinstalarnos en una zona cero, en la que dejáramos atrás los agravios del pasado. Una zona cero en la que, como en su momento lo hicieron España, Chile o más tarde Sudáfrica, el debate se dé a partir de la urgencia de un nuevo proyecto de nación y no de intentar construir sobre endebles cimientos de un pasado que debería estar superado.

El diseño de ese nuevo proyecto pasa por el hecho de voltear a ver a nuestro alrededor para preguntarnos si existe honestidad en la mirada de aquellos que hoy se asumen como los restauradores del diálogo y forjadores del futuro.

Quizá terminaríamos por comprobar que algunos de ellos no son otra cosa que aspirantes a dirigentes de partido o a candidatos presidenciales que aprovechan el río revuelto como trampolín para sus aspiraciones.

Un buen comienzo sería exigir que aquellos involucrados en el debate y la concertación de los nuevos acuerdos nacionales, sean legisladores, gobernadores o secretarios de Estado, se descartaran como candidatos a dirigir algún partido o para cualquier candidatura presidencial, a fin de

instalarse asépticos en el debate, evitando el conflicto de interés y alentando con ello las decisiones de trascendencia.

Ese debate debe sustraerse de los espacios físicos del Congreso o de Los Pinos, para evitar, como sucede ahora, que sea devorado por la agenda del corto plazo.

Un paso natural para lograr el nuevo diálogo sería el de sumar estas voluntades a las de intelectuales, académicos, empresarios y líderes sociales para conformar una evaluación profunda y una propuesta de reforma del Estado.

Esto incluiría, al igual que en Sudáfrica, Nueva Zelanda o Guatemala, la elaboración de escenarios que nos permitieran visualizar las distintas opciones, para aplicar la que con un sentido democrático rindiera los mejores beneficios a los mexicanos.

Debemos colocar sobre la mesa de debates los temas que durante años relegamos, escudados en tabúes de un pasado superado.

La realidad que hoy vivimos impone como prioridad que la reforma del Estado garantice gobernabilidad, y eso impone una agenda de debates sobre la segunda ronda en la elección presidencial.

Pasa de igual manera por imponer candados a los legisladores para acotar los tiempos en que deban votar o vetar las propuestas más urgentes de la nación, o en su defecto obligarlos a someterlas a referéndum o plebiscito.

Obliga a crear instancias que faciliten el diálogo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, como la definición de un jefe de gobierno dedicado a operar detrás de las cámaras.